

S E N T E N C I A

Aguascalientes, Aguascalientes, al día veintidós de octubre del año dos mil veintiuno.-

V I S T O S, para resolver los autos del expediente con número **0407/2020**, que en la vía **ORAL MERCANTIL**, promueve la *******, en contra de ***** así como ***** y, siendo el estado de los autos dictar la sentencia definitiva, se pronuncia la misma al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

I.- En este juicio *******, le demanda a ******* y *******, el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A. Para que se determine judicialmente que existe una obligación que vincula a la ******* como acreedor y los demandados como deudores.-

B. Para que se declare judicialmente que los demandados han incumplido con la obligación de pago contraída con la actora.-

C. Para que se condene a los demandados al pago y cumplimiento de las cantidades consignadas en los pagarés fundatorios derivados de los contratos de CRÉDITO celebrados en fechas veinticuatro de mayo de dos mil diez, veinticuatro de enero de dos mil once y doce de enero de dos mil doce, por la cantidad total de \$24,455.00 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINUCNETA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

D. Por el pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses mensuales ordinarios a razón del 50% del Costo Porcentual Promedio de Captación de la Banca (C.P.P.) vigente cuando le fue otorgado a la parte demandada cada uno de los créditos y sobre saldos insolutos hasta su total liquidación.-

E. Por el pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a razón del 1.25% mensual sobre la cantidad insoluta desde la fecha en que los demandados incurrieron en mora y hasta su total liquidación. Siendo que respecto de esta prestación así como la que se desprende del inciso anterior, se reclama en su conjunto únicamente hasta por un máximo del 37% anual en virtud de lo señalado en el capítulo de hechos.-

F. Por el pago de gastos y costas que se originen con la tramitación del presente juicio" (Transcripción literal que obra a foja 1 y 2 de los autos).-

II.- *** y ***, no dieron contestación a la demanda.-

III.- La parte demandada no compareció a la audiencia preliminar celebrada el día cuatro de octubre de dos mil veintiuno, razón por la que no hay acuerdos de hechos no controvertidos.-

Por la misma razón no hubo acuerdos probatorios, en términos de los artículos 1390 Bis 32, fracciones III y IV, 1390 Bis 36 y 1390 Bis 37 del Código de Comercio.-

Como este juicio se siguió en rebeldía de la parte demandada, por ende, la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción, que son los siguientes:

A.- Que en veinticuatro de mayo de dos mil diez, veinticuatro de enero de dos mil once y doce de enero del año dos mil doce ***, recibió de ***, tres créditos Educativos para cubrir las matriculas y colegiaturas del cuarto al octavo semestre de Licenciatura en Administración Financiera, por la cantidad de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

B.- Que el crédito fue solicitado por *** y fue aceptado por ***, para lo que suscribieron pagarés, obligándose a cumplir el pago, y para demostrar que se suscribieron el crédito.-

C.- Que se pactó un interés mensual ordinario del cincuenta por ciento de la tasa del Costo Porcentual Promedio de Captación Bancaria, sobre saldos insolutos.-

D.- Que la deudora se obligó al pago en el domicilio de la Universidad, sin un previo requerimiento.-

E.- Que se pactó que la falta de pago oportuno, generaría un interés moratorio del uno punto veinticinco por ciento mensual sobre saldos insolutos.-

F.- Que las partes se sujetaron a lo que prevé el reglamento de crédito educativo de la ***, por lo que concluidos los estudios universitarios deberían de pagar al menos el 15% del monto de los créditos otorgados dentro del primer año que siga al fin del estudio financiado, e iniciaría su pago en el presente caso terminado la licenciatura, con un plazo de cuatro años para su pago total.-

G.- Que la falta de pago parcial del quince por ciento del primer año posterior a la terminación de los estudios financiados, facultaba a la *** para exigirles la totalidad del adeudo, por lo que la mora inicia a un año de la fecha del término de los estudios, que fue el dieciséis de junio del dos mil doce, por lo que el crédito ya era exigible a partir del dieciséis de junio de dos mil trece.-

H.- Que ***, terminó sus estudios y debió de cubrir el quince por ciento inicial, no lo hizo, y al no haberlo hecho, a partir del día siguiente a la fecha en que transcurrió dicho año, se ha vuelto exigible el crédito.-

Los anteriores hechos tendrán que ser demostrados por la parte actora, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio.-

Para los efectos antes precisados, ésta parte desahogó la prueba confesional de:

- *** y
- ***

A éste, se le tuvo por confeso según consta en el registro de dicha audiencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil veintiuno.-

Ahora se debe de precisar el efecto que produce la confesión ficta:

a.- Conforme al artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio, lo no previsto para el Juicio Oral regirán las reglas de dicho Código, siempre a

condición de que no se opongan a las disposiciones especiales del Juicio Oral.-

b.- Como en el Juicio Oral Mercantil sí está regulada plenamente la prueba confesional, en su ofrecimiento, admisión y desahogo, resulta, que conforme al artículo 11° del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 2° de éste Código, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no resultan aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes, por tal razón, si el artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio regula especialmente todo lo relativo a la prueba confesional, sólo resultan aplicables sus disposiciones en la confesión ficta, y sin que se pueda acudir a las disposiciones generales del Código de Comercio.-

c.- En razón de lo anterior, como en el presente caso, dichos absolventes no comparecieron y no justificaron su inasistencia a la audiencia, debe de precisarse el efecto que le corresponde.-

d.- La inasistencia a la audiencia del Juicio Oral Mercantil, de quien deba contestar el interrogatorio en la confesional a su cargo, causa que de oficio se tengan por ciertos los hechos que la contraparte pretendió acreditar con tal prueba, acorde a lo que prevé el artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio.-

e.- Ahora, los hechos que se deben de tener por acreditados son los que afirmó la parte actora en su demanda, que ya se precisaron.-

f.- Cabe precisar que éste juicio se inició en:

- **06 de Octubre del 2020.**-

En razón de lo anterior, le resultan aplicables las reformas al Código de Comercio, del Diario Oficial de la Federación en veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, que prevé:

"Artículo 1390 Bis 41.- La prueba confesional en este juicio se desahogará conforme a las siguientes reglas:

I.- La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios que, en el acto de la audiencia se formulen;

II.- Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. El juez, en el acto de la audiencia, calificará las preguntas que se formulen oralmente y el declarante dará respuesta a aquellas calificadas de legales, y

III.- Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar con esta probanza, salvo prueba en contrario".

Ahora bien, si bien es cierto existe Jurisprudencia por contradicción de tesis, en el sentido de que para poder declarar por confeso una de las partes, se requiere la exhibición previa del pliego de posiciones, en éste caso resulta que no es aplicable.-

La Jurisprudencia es la siguiente:

TESIS JURISPRUDENCIAL 63/2018 (10a.)
PRUEBA CONFESIONAL EN EL JUICIO ORAL
MERCANTIL. DEBE DECLARARSE DESIERTA CUANDO EL
OFERENTE NO HAYA EXHIBIDO PLIEGO DE POSICIONES Y
LA PERSONA QUE HA DE ABSOLVER POSICIONES, SIN
JUSTIFICACIÓN, NO COMPAREZCA A LA AUDIENCIA DE
DESAHOGO.

Del artículo 1390 Bis 41, del Código de Comercio, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la exhibición del pliego de posiciones de manera previa a la diligencia de desahogo de la prueba confesional constituye una carga procesal del oferente de la prueba, cuyo incumplimiento impide al juzgador tener por confeso a la parte que, de forma injustificada, no asista a absolver las posiciones. Ahora bien, del proceso legislativo

que culminó con la reforma de ese precepto, se advierte que el legislador, ante la omisión del oferente de exhibir el pliego cerrado de posiciones, no previó la posibilidad de que se le diera la oportunidad de formular posiciones de forma oral; menos aún que, no obstante esa omisión, se declarara confesa a la parte que no compareció. Por tanto, cuando en un juicio oral mercantil el oferente de la prueba no exhibe de manera precautoria antes de la audiencia un pliego cerrado que contenga posiciones y la parte que ha de declarar no se presenta, la prueba confesional debe declararse desierta ante la ausencia de posiciones que puedan calificarse de legales.-

Contradicción de tesis 199/2018.-

Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de octubre de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez.-

El artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, requería la exhibición previa del pliego de posiciones a la diligencia de desahogo de la confesional, como carga procesal del oferente de la prueba, pero la obligación de la exhibición del pliego desapareció con la citada reforma de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete al mismo artículo 1390 Bis 41.-

El artículo 1340 Bis 41 del Código de Comercio, del Diario Oficial de la Federación de nueve de enero del año dos mil doce, textualmente señalaba:

ARTÍCULO 1390 BIS 41.- La prueba confesional en éste juicio se desahogará conforme a las siguientes reglas:

I.- El oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar, conforme a las posiciones que en el acto de la diligencia se le formulen, pudiendo exhibir el pliego cerrado que las contenga hasta antes de la audiencia, para los efectos señalados en la fracción III;

II.- Las posiciones serán formuladas en forma oral por el oferente, sin más limitación de que ésta se refieran a hechos propios del declarante y que sean objeto del debate.- El juez, simultáneamente a su formulación, calificará las posiciones, declarando improcedentes aquellas que lo fueren y;

III.- Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen y que sean calificadas de legales, de oficio se le declarará confeso.- Solamente en el primer caso, el juez procederá a la apertura del pliego para los efectos antes señalados”.-

Ahora, según se advierte de la reforma al artículo 1390 Bis 41 del Código de Comercio, del nueve de enero del año dos mil doce, hasta el veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, la declaración de confeso requería como requisito la exhibición del pliego de posiciones, pero desde el veinticinco de enero del dos mil diecisiete, la exhibición del pliego ya no es condición para que se declare a una de las partes por confesa, como es éste caso.-

Sustenta además lo anterior, el hecho de que en materia procesal, los derechos nacen del procedimiento mismo, y que se agotan en cada etapa procesal en que se van originando, y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si cuando se actualiza una etapa del procedimiento,

el legislador previamente modificó su tramitación introduciendo una nueva forma de ejecutar un acto, debe aplicarse la norma al momento en que se pide el acto respectivo o se actualiza su hipótesis.-

Justifica el criterio rector asumido, la siguiente jurisprudencia:

Novena Época.- Registro digital: 1012265.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Apéndice de 2011.- Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda Parte - TCC Cuarta Sección. Irretroactividad de la ley y de su aplicación.- Materia(s): Civil.- Tesis: 978.- Página: 2291.-

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS

PROCESALES.-

Para que una ley se considere retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales. En efecto, se entienden como normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del Juez competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última.-

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 503/94.-Miguel Ángel Tronco Quevedo.-29 de septiembre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.-Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.-

Amparo directo 800/96.- Alejandro Barrenechea Meza y Rosa María Matence Espinosa de Barrenechea.- 29 de noviembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.-

Amparo directo 822/96.- Antonio Cuadros Olvera.- 5 de diciembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Caballero Cárdenas.- Secretario: Jesús Jiménez Delgado.-

Amparo directo 52/97.- Juan Miguel Rivera Piña.- 18 de febrero de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro.-

Amparo directo 63/97.- Leobardo Gutiérrez Gómez y Araceli Torres González.- 24 de febrero de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.- Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña.-

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 178, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.8o.C. J/1; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 178.

Ahora, como la confesión ficta que se obtuvo a cargo de la parte demandada demuestra la acción, y le resulta aplicable en contra de tal declaración el artículo 1290 del Código de Comercio, conforme al cual, el declarado confeso puede rendir prueba en contrario, razón por lo que deberán analizarse las pruebas desahogadas para el efecto de determinar si existe una que desvirtúe la confesión ficta obtenida.-

Según se advierte de los registros del juicio, la parte demandada en el presente caso no desahogó ni una prueba, por lo que debe prevalecer la declaración de confesa.-

Además, la parte actora ofreció la documental privada visible a fojas 17 a 35 de los autos, consistente en el reglamento del fondo de crédito educativo y sus reformas; constancia de estudios, el contrato de crédito educativo; como el pagaré que obra en la seguridad del juzgado, que como no fueron objetados, se deberá de tener a la parte demandada por reconociéndolos, acorde al artículo 1296 del Código de Comercio.-

Ahora bien, atendiendo al contenido de las pruebas demuestran los hechos afirmados por la parte actora, ya descritos en líneas que anteceden y deben a ***, los VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.-

Ahora, como la parte actora demostró el crédito educativo por los VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, corresponde a la parte demandada la carga de la prueba para probar su pago acorde con el artículo 1194 del Código de Comercio.-

Según se advierte de autos no ofreció la parte demandada ni una prueba, se concluye que incumplieron, razón por la que se les condena a su pago.-

VI.- En consecuencia, se les condena a *** y a ***, a pagar los VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS de suerte principal a ***.-

También se le condena al pago de los intereses ordinarios, a razón de la tasa del cincuenta por ciento del costo porcentual promedio de captación bancaria más los intereses moratorios del 1.25 por ciento mensual sobre las cantidades insolutas, a partir del diecisiete de junio del año dos mil trece, y hasta la solución del adeudo, en el entendido que si los porcentajes de dichas tasas, por ser variables, si exceden del máximo de la usura del treinta y siete por ciento anual, se

reducirá de oficio a su máximo permitido en la ejecución de sentencia.-

Conforme con el artículo 1084 del Código de Comercio, en virtud de que se considera que la parte demandada no actuó con temeridad o mala fe procesal, no se condena al pago de los gastos y costas del juicio.-

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo establecido por los artículos 1077, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 y relativos del Código de Comercio, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Analizadas las cuestiones, ***, sí probó su acción, mientras que *** y ***, no contestaron la demanda.-

SEGUNDO.- En consecuencia se condena a *** y a ***, a pagar los VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, a la parte actora, como suerte principal.-

TERCERO.- Se le condena a la parte demandada al pago de un interés ordinario y de un moratorio, según se precisó en esta sentencia, a partir del diecisiete de junio de dos mil trece, y hasta la total solución del adeudo.-

CUARTO.- No se hace condena respecto de los gastos y costas del juicio.-

QUINTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

SEXTO.- Cúmplase con lo que prevé el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio.-

SÉPTIMO.- En términos de lo previsto por el artículo 73 Fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto del año dos mil veinte, se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los lineamientos para la Elaboración de

Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.-

A S Í, lo resolvió y firma el **LICENCIADO HUGO BERNARDO MÁRQUEZ ELÍAS, JUEZ QUINTO DE LO MERCANTIL ESPECIALIZADO EN ORALIDAD,** ante su Secretario de Acuerdos, Licenciado OSCAR REYES LEOS.- Doy Fe.-

FIRMA DEL JUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO

Esta resolución se publicó en listas de veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno.- Conste.-

Juez/ari

El licenciado Óscar Reyes Leos, Secretario de acuerdos del Juzgado Quinto Mercantil especializado en oralidad del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia dictada en fecha veintidós de octubre del dos mil veintiuno, por el Juez Quinto de lo Mercantil especializado en oralidad con sede en esta Ciudad, la cual consta de siete fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas, se suprimió: el nombre de las partes, el

de sus representantes legales, sus domicilios y demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.